

Por un antirracismo radical en las periferias de la Ciudad de México

Prácticas de vida, resistencia y hospitalidad para las personas migrantes

Amarela Varela-Huerta

Profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Licenciada en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la UNAM, especialista en Migraciones por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y Doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabaja en torno a las migraciones y los movimientos sociales que se producen en torno a esta movilidad. Es miembro del Seminario Narrando Fronteras desde los Feminismos y participa en redes y colectivos que estudian, defienden y acuerpan procesos de insurgencia migrante. Su trabajo está disponible para libre descarga en <https://uacm.academia.edu/AmarelaVarela>



Para el pueblo palestino, con amor y con rabia

E

l 15 de febrero de 2024 en Sonora, México, se registró otra masacre más de migrantes. Por los reportes de organizaciones defensoras de migrantes del otro lado

del muro sabemos que en ella fueron asesinados Jonzi, un niño ecuatoriano de 4 años, y Wendy Carranza, una madre hondureña que viajaba con su bebé de 15 meses, a quien arrojó por horas, incluso herida, hasta que ella murió. Hoy el bebé permanece bajo custodia del Estado mexicano en un “albergue” para niños migrantes no acompañados.

A esta última masacre conocida se le suman las de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 (la primera), las decenas de fosas clandestinas aparecidas en 2011 en esa misma localidad en donde se presume que un gran número de restos pertenecen a migrantes, tanto de México como de toda América Latina, según el libro *San Fernando: última parada* (2023) de la periodista Marcela Turati. Entre las masacres de Tamaulipas, de 2010, y la de Sonora, en 2024, hemos asistido además a la masacre de Cadereyta, Nuevo León, en 2012; luego a la masacre de Camargo, Tamaulipas, en 2021 y en mayo de 2023 supimos también del incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde a consecuencia de la violencia de Estado y la complicidad de la empresa de seguridad privada subcontratada por el Instituto Nacional de Migración (INM), murieron estando bajo la tutela del Estado mexicano 40

migrantes detenidos. Todas estas masacres, más las incontables y no reporteadas muertes masivas de personas que viajaban en tráileres hacia Estados Unidos o las muertes de niñas, niños y adultos en estaciones migratorias mexicanas, a lo largo de esos años, no son casos aislados.

No obstante, estas masacres y muertes en masa son conocidas en medio de la “guerra contra el pueblo”, la de la estrategia de “combate al narcotráfico”, que ha dejado más 420,128 personas víctimas de homicidio, entre quienes el 36% eran jóvenes, según el INEGI y más de 120 mil personas desaparecidas según los registros estatales. Unas y otras muertes, las de migrantes de otros países y las de mexicanos (también en situación de movilidad), han ampliado los márgenes de la tolerancia social a la violencia, ya sea ésta responsabilidad del Estado o entre particulares. Es, pues, a escala macrosocial, la violencia institucional la que sostiene a la violencia social y viceversa.

Desde nuestra perspectiva, estas masacres representan un *continuum* de violencia sobre los cuerpos de niñas y niños, adultos y ancianos racializados y empobrecidos, que se sostienen del silencio y la impunidad. Como ya lo han dicho muchísimas veces académicos, juristas, organismos internacionales e incluso órganos estatales en México y Estados Unidos, mientras no haya reconocimiento de esta violencia y sanciones reales, seguiremos asistiendo como testigos a esta que yo llamo una guerra total y transnacional contra las poblaciones migrantes.

Una hipótesis heredada de la propuesta de justicia transicional que, propongo, puede extenderse a la comprensión de esta violencia de Estado, de mercado y de gobiernos privados indirectos (la suma de agentes estatales y de grupos de interés de industrias ilegalizadas) es que, como lo demuestra la memoria de familias y madres buscadoras de migrantes con vida, en desaparición o víctimas de asesinato, el Estado mexicano no ha construido los canales efectivos y reales para el reconocimiento de las víctimas como tales; por ello, no hay espacios ni protocolos para que estas víctimas o sus familias expongan su verdad,

Como ya lo han dicho muchísimas veces académicos, juristas, organismos internacionales e incluso órganos estatales en México y Estados Unidos, mientras no haya reconocimiento de esta violencia y sanciones reales, seguiremos asistiendo como testigos a esta que yo llamo una guerra total y transnacional contra las poblaciones migrantes.

y ésta sea judicializada y, como producto de ello, se ejerza justicia. Como no hay reconocimiento de este *continuum* de muerte, no hay verdad de las víctimas, y como no hay escucha ni procedimientos legales que finquen responsabilidades, no existe justicia, mucho menos reparación. Lo que sí tenemos, como una espiral, es la repetición de estas formas de violencia extrema en México.

Éste es el marco que explica la poca resonancia de la última masacre de migrantes en Sonora durante febrero de 2024. Y éste es el marco también que explica el acoso y criminalización no sólo contra migrantes sino, cada vez más, contra sus defensoras y defensores que, lo mismo en el sur de México que en la franja fronteriza norte, ven cómo se judicializan y sentencian, como si fueran casos de trata y tráfico de migrantes, esfuerzos de hospitalidad radical para sostener el tránsito de familias que buscan el asilo político lo mismo de Haití, Honduras y Venezuela y de las familias refugiadas de la violencia desatada por los cárteles de la droga, el limón y el aguacate en todo México.

Esta dimensión macrosocial de la tolerancia institucional a la violencia es la que ofrece oportunidad para la reproducción de violencias a escalas meso y microsociales en territorios, como ya dijimos, atravesados por la herida de una guerra sin dos bandos. Éste es

el caso de la zona donde vivo y enseño periodismo y antropología: el Oriente de la Ciudad de México, y en concreto las delegaciones de Tláhuac e Iztapalapa.

Tláhuac e Iztapalapa como vitrina de una ciudad tapón en un país frontera

Las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa, ubicadas al suroriente de la Ciudad de México, se vistieron de colores desde que acabó el encierro por Covid-19. A las comunidades originarias de esa parte de la capital mexicana, a quienes ya se habían sumado grandes contingentes de migrantes internos mexicanos y desplazados por las muchas guerras y extractivismos, se unieron desde la postpandemia personas que caminan desde el tapón de Darién en Colombia y Panamá, o que llegaron lo mismo desde el Caribe o después de construir los estadios de Brasil y participar, siempre irregularizados, en la “prosperidad” chilena: personas de Venezuela, Haití, Cuba y Honduras son las nuevas vecindadas en nuestros barrios.

Familias enteras nos refieren que vienen de zonas igual de empobrecidas que algunos de los barrios de esta parte de nuestra ciudad. Llegaron por tierra al sur de México y consiguieron desafiar los anillos de contención migratoria del sur sureste mexicano, con todo y las persecuciones, palizas y torturas de militares de la Guardia Nacional o agentes militarizados del INM que intentaron separar a las familias o deportarlas a esos países del encarcelamiento masivo a lo Bukele o de la escasez de medicamentos tipo Venezuela.

Estas personas sobrevivientes de todas partes se suman a la vida cotidiana de barrios que hace décadas ya padecen de escasez de todo tipo de derechos: lo mismo en salud, por hospitales siempre desbordados, que en educación, debido a escuelas todavía dañadas por el sismo de 2017, y calles con las tripas de fuera luego del “derrumbe” de la línea 12 del Metro que nos une con la parte central de la ciudad, y en donde, sobre todo, escasea el agua.

Apenas como ejemplo, desde que en marzo de 2023 la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado trasladara su “ventanilla única”

Esas familias pintaron de colores, olores, rabias, luchas e historias nuestros barrios. Se fueron quedando, primero acampando en situación de calle y disputando el agua escasa a los vecinos de unidades habitacionales sobrepobladas; luego, rentando habitaciones en hoteles que antes querían ser “de paso” y se convirtieron en nidos de familias limpias, muy heridas pero muy dignas.

al Bosque de Tláhuac para “descomprimir” la presión de los vecinos y la alcaldesa Sandra Cuevas de Cuauhtémoc (donde la COMAR tiene sus oficinas centrales), cientos y miles de familias migrantes, sobre todo de Venezuela y Haití, tuvieron que trasladarse a ciegas (pues no existían señalamientos en creole) hasta llegar a ese bosque de Tláhuac. Una vez allí, descubrían que el trámite para declararse solicitante de refugio en México se producía a cuentagotas e implicaba una espera de semanas o meses.

Por ello, esas familias pintaron de colores, olores, rabias, luchas e historias nuestros barrios. Se fueron quedando, primero acampando en situación de calle y disputando el agua escasa a los vecinos de unidades habitacionales sobrepobladas; luego, rentando habitaciones en hoteles que antes querían ser “de paso” y se convirtieron en nidos de familias limpias, muy heridas pero muy dignas, e incluso, poco a poco, que fueron sumándose a las juntas de vecinos de esas unidades habitacionales con larga tradición de organización barrial.

En este marzo de 2024 ya hay niños haitianos trilingües en las escuelas de San Lorenzo Tezonco y La Nopalera, dos barrios de Iztapalapa, que aprenden sus lecciones escolares en castellano chilango, que traducen rápidamente del chileno que conocen, y que comparten, en esos cuartos de hotel o en departamentos de 40 metros cuadrados, con sus familias en un



Caravana Migrante en la Ciudad de México. Wikimedia Commons.

En este marzo de 2024 ya hay niños haitianos trilingües en las escuelas de San Lorenzo Tezonco y La Nopalera, dos barrios de Iztapalapa, que aprenden sus lecciones escolares en castellano chilango, que traducen rápidamente del chileno que conocen.

francés *creolizado* o en un creole ya muy mestizo. En esas aulas, en esas juntas de vecinos, en las filas para cobrar las remesas enviadas a través de Elektra, lo mismo a caribeños y sudamericanos que a mexicanos, esos migrantes venidos del Darién se conocen con las familias transnacionales que se sostienen del dinero que envían sus familiares mexicanos que sobrevivieron al desierto texano y a sus guardias blancas que disparan a quemarropa.

En las panaderías y a la salida de las escuelas, en las Utopías y las albercas comunitarias que tienen wifi, se mezclan los jóvenes indios, mestizos y negros para escuchar hip-hop, reguetón, funky a la brasileira o regional mexicano mientras intercambian trucos para sobrevivir en barrios secos de agua potable pero ricos en estrategias para la sobrevivencia.

Es la guerra transnacional contra las y los migrantes lo que atoró a todas y a todos los desterrados mexicanos y latinoamericanos que hoy son nuestros nuevos vecinos. Son sus cuerpos y

sus historias, sus narrativas y sus ritmos los que nos narran los efectos de esa política de impunidad que se traduce en un *continuum* de violencias tolerada y alimentada institucional y socialmente. Son esos niños y niñas que nos *traducen* a sus familias, esas haitianas que cocinan delicioso pollo frito, esas venezolanas que cortan el cabello, esos estudiantes nicaragüenses que regularizan a los pequeños de los barrios más mestizos hoy, antes de que la frontera gringa se estirara hasta el Oriente de nuestra ciudad monstruo, quienes nos develan, en lo minúsculo y lo cotidiano, la capacidad de los habitantes de la periferia del Oriente de la Ciudad de México para acomodarnos, hacer espacio, y dar la bienvenida con nuestra hospitalidad radical a quien se fugó de la miseria, el cambio climático, el racismo y la violencia institucional o social, para buscar una existencia que se pueda vivir y celebrar. “Aquí –dice uno de mis estudiantes de la UACM– cabemos todes”. 🇵🇸